

Septiembre – diciembre 2002

Tras el 11 de septiembre

Conflicto social y

hegemonía norteamericana

en América Latina¹



Por José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati

En un contexto de aceleración de la crisis económica y de crecimiento de la protesta social –que venía desplegándose en Latinoamérica por lo menos desde finales del año pasado– el inicio del último cuatrimestre de 2001 aparece claramente signado por el impacto en la región de la nueva situación internacional abierta tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, la intervención militar anglo-norteamericana en Afganistán y la política exterior impulsada por la administración Bush. En este sentido, al aletargamiento de los conflictos sociales durante el mes de septiembre, debe sumársele tanto la profundización de las políticas de criminalización y represión de las protestas como los avances registrados en los procesos de negociación de los acuerdos de liberalización comercial y, particularmente, del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

En el marco de estos procesos, los hechos de conflicto relevados por el OSAL para el período septiembre-diciembre muestran una caída del 6,7% respecto de los resultados obtenidos para el cuatrimestre anterior (1.868 registros frente a 2.003). Sin embargo esta disminución de la conflictividad social a nivel regional está lejos de ser homogénea. Si en el caso de Centroamérica y Chile el descenso de los hechos de protesta es significativo, por

contraposición, en Bolivia, Perú y Venezuela (región andina) los mismos se incrementan –aunque con características marcadamente diferentes en cada uno de los casos–, mientras que alcanzan magnitudes similares para el resto de los países del Cono Sur. Entre estos últimos se destaca el proceso vivido en Argentina, donde, en las últimas dos semanas del año, un renovado ciclo de protestas, motivado particularmente por las últimas medidas económicas del ex ministro Cavallo, desembocó en la renuncia de éste y del presidente De La Rúa y abrió paso a una profunda crisis política que –en 15 días– transitó por cinco presidentes y que, al momento de escribir estas notas, no puede afirmarse aún que haya encontrado una resolución definitiva. La renuncia forzada del ex presidente De La Rúa se incorpora así a la lista –por cierto, nada breve si consideramos los casos de Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela en la última década– de gobernantes “neoliberales” latinoamericanos que debieron abandonar apresuradamente el poder al calor –aunque no únicamente– del repudio y la movilización social.

Sin embargo, la relativa disminución de la conflictividad social para el período que analizamos –en comparación con el significativo crecimiento registrado para mayo-agosto– señala un relativo debilitamiento de la protesta justamente en aquellos países que en buena parte alimentaron las dinámicas del

pasado período (Seoane, Taddei y Algranati, 2001), concentrándose la mayor parte de las luchas, esta vez, en la región andina y en algunos países del Cono Sur.

Por otra parte, la creciente radicalidad de las formas que asume la protesta –que ya habíamos señalado para el período anterior– se prolonga y afirma durante estos últimos cuatro meses del año aunque, en varios casos, en un cuadro de relativo aislamiento nacional o sectorial. En relación con los sujetos colectivos que protagonizan los conflictos se destacan, nuevamente, los asalariados del sector público, aunque la configuración de sus acciones parece adoptar una territorialidad más local o sectorial que en el cuatrimestre anterior. Entre los principales conflictos del período vale señalar la larga serie de enfrentamientos y bloqueos de carretera de los campesinos “cocateros” del Chapare en Bolivia; las distintas luchas en Perú que protagonizan maestros, trabajadores estatales despedidos durante la década fujimorista y pobladores –bajo la forma de paro cívicos– en un cuestionamiento creciente a la política económica adoptada por el actual presidente Toledo; las huelgas del sector público en Venezuela y las protestas –impulsadas particularmente por las cámaras empresariales– contra el paquete legislativo sancionado por el presidente Chávez (López Maya, 2002). También se destacan el extendido paro que llevan adelante los funcionarios públicos en Brasil así como las acciones del Movimiento Sin Tierra y los dos ciclos de protestas que se desarrollan en Argentina, el primero –a lo largo de septiembre y octubre– protagonizado principalmente por los trabajadores desocupados y los empleados del sector público, y el segundo –iniciado en diciembre– signado por saqueos y reclamos de alimentos por una parte, y por cacerolazos y movilizaciones de sectores urbanos –particularmente capas medias– por la otra, que culmina con la caída del gobierno nacional.

Presentaremos a continuación una breve descripción de la conflictividad social del período considerada a la luz de los movimientos u organizaciones que la protagonizan pa-

ra luego abordar los procesos que tienden a profundizar la criminalización de las luchas y los intentos de una renovada subordinación de la región a la hegemonía norteamericana. Finalmente incluimos una referencia particular de los hechos vividos durante el período analizado en Bolivia y Argentina.

■ **Trabajadores y pobladores: la configuración de la protesta en el sector urbano**

En contraposición a la disminución de la conflictividad social regional que ya señalamos, el número de acciones encabezadas por los trabajadores del sector público para este período no varía respecto del anterior, que ya había significado un notable crecimiento con relación al primer cuatrimestre de 2001 y al último de 2000. Asimismo, nuevamente, sus conflictos representan el 71% del total de los hechos protagonizados por los asalariados en su conjunto y el 24,7% de todas las protestas registradas. Sin embargo su distribución regional aparece, esta vez, mucho más concentrada en algunos países (Argentina, Venezuela, Perú y México comprenden más del 50% de los registros) y, en buena parte de los casos, las protestas resultan mucho más localizadas espacial o sectorialmente.

En Argentina se concentra la mayor parte de las acciones de los trabajadores de este sector. En respuesta al ajuste bautizado “déficit cero” implementado por el gobierno nacional a mediados de julio –que acentuaba, una vez más, el signo “ortodoxo” y fiscalista que caracterizó la gestión de De La Rúa–, rápidamente asumido por la amplia mayoría de las administraciones provinciales, empleados del estado nacional y de las gobernaciones, maestros y el conjunto de la comunidad universitaria encarnan un nuevo e intenso ciclo de protestas que se inicia ya a mediados del cuatrimestre anterior y se prolonga durante casi todo el período considerado. La rebaja del 13% en los salarios (que incluye también a las jubilaciones), las cesantías, el pago de parte de los salarios con bonos –en el caso de

los empleados provinciales— o directamente el no pago, a lo que se agrega la deuda del incentivo docente y el recorte del presupuesto universitario —lo que condenaba a varias casas de estudio a su virtual paralización— motivaron las protestas y señalaban ya el colapso del régimen económico conocido como “convertibilidad”. Durante los primeros meses, estas huelgas y manifestaciones se articulan con las jornadas nacionales de cortes de ruta progresivos que impulsan las organizaciones de desocupados a partir de su segunda asamblea nacional y que cuentan con el apoyo, entre otros, de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Sin embargo la protesta adopta una intensidad particular en el ámbito provincial, con multitudinarias manifestaciones que congregan, en muchos casos, no sólo al conjunto de los trabajadores del sector público sino también a otros sectores sociales aunque no llegan a adoptar el carácter de “puebladas”. La lucha contra el ajuste del sector público de las administraciones provinciales se expresa así en la mayoría de las principales ciudades del país, donde las escenas de violenta represión policial y enfrentamientos se repiten en muchas ocasiones, preanunciando en el interior del país los trágicos hechos que habrían de vivirse en Buenos Aires hacia fines de diciembre.

Por otra parte, en Venezuela los hechos protagonizados por estos asalariados, si bien resultan cuantitativamente importantes, no sólo aparecen más fragmentarios y localizados sino que plantean reivindicaciones diferentes. Los docentes encabezan una parte importante de las luchas en reclamo de aumento salarial, cuestionando la ley orgánica de educación y el convenio colectivo y exigiendo el cumplimiento del cronograma de pagos en el caso de los profesores de educación superior. También se registran acciones de los empleados públicos —particularmente locales por salarios adeudados—, del sector de la salud y de los trabajadores de las empresas del estado o mixtas.

Pueden señalarse también la prolongada huelga de docentes universitarios en Brasil

por aumento salarial, las protestas de los maestros rurales y urbanos en Bolivia contra las medidas de reducción de planteles y salarios, o en México por incremento de haberes, y el conjunto de acciones de los trabajadores del sector público en Perú donde, además, los despedidos durante el fujimorismo protagonizan una serie importante de conflictos.

Como lo señalamos en artículos anteriores, el conjunto de los asalariados del sector público viene protagonizando una intensa batalla a nivel regional tanto contra las políticas de privatización como frente a los reiterados ajustes presupuestarios, precarización de las condiciones laborales y descentralización que signan al modelo capitalista neoliberal. Particularmente intensas durante el último cuatrimestre de 2000 (en gran medida cuestionando la elaboración del presupuesto fiscal para el año siguiente), y en el segundo cuatrimestre de 2001, la configuración que adoptan para el período actual muestra tanto su sostenida presencia como una relativa segmentación de sus acciones.

Las acciones encarnadas por los trabajadores del sector privado (industria y servicios) en este período muestran una disminución del 5% respecto del segundo cuatrimestre de 2001, representando el 29% de los hechos registrados para el conjunto de los asalariados empleados. Uno de los países donde se concentra una porción importante de estas luchas es Argentina (21%), destacándose los prolongados conflictos de los trabajadores de la ceramista Zanón, en el sur del país, y de Aerolíneas Argentinas (vale agregar que también se registran conflictos en otras líneas aéreas de la región). En este caso la casi totalidad de las protestas surgen frente a políticas de despidos, rebaja salarial o cierre de los establecimientos, y suelen adquirir un carácter extendido y radical en las formas de protestas donde se combinan las movilizaciones, las ocupaciones y los cortes de ruta. También en Brasil las acciones de estos colectivos resultan significativas, pudiendo señalar, entre otros hechos, las manifestaciones y huelga de los sindicatos metalúrgicos afiliados a la

CUTdel ABC paulista en reclamo de aumento salarial y contra la reducción de personal así como el conflicto particular que llevan adelante los trabajadores de Volkswagen contra los 3 mil despidos anunciados por la empresa (Galvão, Boito, Coletti y Trópia, 2002). En el caso de Volkswagen también, pero en México, durante los primeros días del mes de septiembre concluye el paro que los asalariados venían llevando adelante desde mediados de agosto por aumento salarial tras llegar a un acuerdo con la empresa. Por otra parte, en Bolivia se destacan las movilizaciones, ocupaciones y protestas de los trabajadores mineros que, ante la caída de los precios internacionales y los ajustes decididos por las empresas, reclaman por la conservación de sus puestos de trabajo, por políticas de asistencia gubernamental y, en el caso de las cooperativas, por apoyo financiero. En Perú (trabajadores de la construcción y portuarios), Chile (trabajadores portuarios y de pesca), Panamá (asalariados de distintas empresas bananeras) y Uruguay (bancarios, entre otros) se verifican también conflictos encabezados por asalariados del sector privado.

Para el caso de los trabajadores desocupados, a las acciones que se registran en Argentina, Uruguay y Panamá –ya analizadas para el cuatrimestre anterior (Seoane, Taddei y Algranati, 2001) aunque en este caso resultan un poco menos significativas– puede agregarse, si bien tienen una naturaleza diferente, las intensas protestas llevadas adelante por despedidos del sector público por el fuji-morismo en Perú que reclaman, fundamentalmente, su reincorporación; y la de los trabajadores despedidos de YPF en Bolivia que reclaman el cumplimiento del acuerdo suscripto por el gobierno en 1999 que les garantizaba empleo y otros beneficios.

Finalmente, se destacan toda una serie de acciones caracterizadas por la movilización ciudadana de los pobladores de localidades o regiones. En este caso vale resaltar la larga e intensa serie de “paros cívicos” y manifestaciones en numerosas ciudades del Perú, que recorren todo el período fundamen-

talmente en reclamo, al gobierno nacional, de obras de infraestructura y políticas de desarrollo, así como las protestas de los “comité cívicos” de diferentes ciudades en Bolivia en cuestionamiento de las privatizaciones y de las tarifas eléctricas. En cierta medida semejantes, aunque diferentes en su configuración y sus reivindicaciones, a finales de diciembre los “cacerolazos” y manifestaciones en las principales ciudades de Argentina –particularmente protagonizados por los sectores medios y amplias franjas juveniles–, especialmente significativas en la ciudad de Buenos Aires, pusieron nuevamente de manifiesto las renovadas experiencias de movilización, en clave ciudadana, de los sectores urbanos en cuestionamiento a las políticas neoliberales.

■ **Conflicto agrario, violencia y criminalización**

La dinámica de la disputa agraria en el período analizado parece acompañar la tendencia general reseñada para la conflictividad global. Las acciones protagonizadas por el sector campesino-indígena y por los pequeños productores agrarios representan en este caso el 10,95% del total de los registros. El conflicto campesino-indígena presenta una disminución del 6% en el número de protestas en relación al cuatrimestre precedente (159 contra 169 entre mayo y agosto). Los hechos protagonizados por los pequeños productores agrarios evidencian una caída del 19% en relación al período anterior (47 contra 58). En ciertos países donde la presencia campesino-indígena es relevante, este sector social aparece como el más dinámico en su capacidad para articular la acción de otros movimientos y/o confluir junto a otros sectores sociales en protestas contra los planes de ajuste asociados a las políticas neoliberales.

En Brasil las acciones de estas organizaciones se incrementan significativamente con relación a los dos primeros cuatrimestres de 2001. Esta intensificación numérica también parece tener un correlato en la amplitud terri-

torial de las acciones que abarcan un mayor número de estados del país: Pernambuco, Alagoas, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Rio de Janeiro, etc. Si bien la ocupación de tierras y latifundios improductivos representa el número más importante de registros, los movimientos campesinos –fundamentalmente el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)– realizan otro tipo de acciones que dan cuenta de una estrategia de intervención que no reposa solamente en la posesión de la tierra sino en un cuestionamiento más amplio y general de la política agraria y del modelo neoliberal en Brasil. En dicho sentido es preciso señalar la protesta realizada por el MST, la Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) y el Movimento de Pequenos Agricultores frente al palacio de gobierno en Brasilia para denunciar ante una delegación de la ONU la política agraria del gobierno de Fernando H. Cardoso. La voluntad de confluencia con otros sectores sociales afectados por el modelo económico explica la realización de acciones de solidaridad –existentes en el período tratado– con los funcionarios federales en huelga. Entre las acciones ligadas a la denuncia de las consecuencias del modelo agrario pueden señalarse la invasión de la fábrica de leche Parmalat en el estado de Pernambuco para protestar contra los bajos precios pagados por la leche, y la invasión de una empresa productora de soja en Minas Gerais. A finales de noviembre militantes del MST coordinan la ocupación de agencias del Banco do Brasil en diez estados con el objetivo de forzar al gobierno a renegociar las deudas con los agricultores. Diversas acciones tienen por objetivo las dependencias del INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria) para exigir al gobierno federal el cumplimiento de acuerdos relativos a la asignación de tierras, así como también el cercamiento realizado por el MST a una hacienda de la familia del presidente Cardoso.

Por otra parte, las numerosas acciones y protestas protagonizadas por la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco y por el Conse-

jo de Todas las Tierras de Chile muestran la relevancia y persistencia que guarda el conflicto mapuche en el sur de dicho país. La ocupación de fundos, el reclamo del cumplimiento de acuerdos ya suscritos (otorgamiento de tierras y liberación de los presos) y la batalla contra la construcción de la central hidroeléctrica Ralco son algunas de las reivindicaciones más importantes de las comunidades protagonistas de un conflicto que –como señaláramos en el número 5 del OSAL– se enfrentan con una fuerte política represiva frente a sus demandas. El recurso a acciones de sabotaje por parte de las comunidades parece ser un mecanismo de respuesta al comportamiento del gobierno.

Finalmente, diferentes comunidades indígenas mexicanas prolongan las acciones de protesta iniciadas en el cuatrimestre anterior en diversos estados contra la aprobación de la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena. En el mes de septiembre cientos de campesinos y estudiantes chiapanecos inician la Marcha por la Dignidad en Defensa del Campo y del Movimiento Popular hacia la ciudad de México, denunciando hostigamientos militares y policiales impulsados por las autoridades estatales y exigiendo la implementación de proyectos agrarios y de desarrollo y la regularización de terrenos urbanos y rurales que tienen en posesión. Asimismo, es importante destacar el conflicto en el estado de México originado por la decisión gubernamental de expropiar cinco mil hectáreas en dos municipios para construir un aeropuerto internacional. Los cortes de ruta protagonizados por campesinos y pobladores son reprimidos por las fuerzas de seguridad. Por último cabe destacar la persistencia del conflicto de los pequeños productores de piña que, agrupados en el Frente Nacional para la Defensa del Campo Mexicano, exigen medidas contra la importación masiva del producto y su contrabando.

Para terminar, las protestas agrarias de los productores cocaleros de la región del Chapare boliviano contra la política oficial de erradicación de los cultivos de coca parecen intensificarse respecto de los meses ante-

rios, cuestión que abordaremos con mayor detalle en el análisis de los casos nacionales. Por otra parte, en Paraguay los reclamos de implementación de proyectos productivos y de créditos accesibles como el otorgamiento de tierras constituyen las reivindicaciones más destacadas de las acciones protagonizadas por el movimiento campesino.

La violenta represión del conflicto cocalero en el Chapare boliviano que cobró la vida de muchos campesinos, las numerosas muertes de manifestantes contra el plan de ajuste neoliberal en Argentina, la proliferación de detenidos sociales en numerosos conflictos en la región y la intervención cada vez más notoria de cuerpos represivos ilegales en diversos países son una clara manifestación de la consolidación de una preocupante tendencia: la represión de los conflictos y la criminalización de las organizaciones y activistas. Esta tendencia se evidencia con claridad en el desarrollo de las protestas protagonizadas por campesinos e indígenas en la región a lo largo del año, pero no se restringe en absoluto a este sector social. La experiencia inmediata de la Argentina en las protestas de diciembre y los asesinatos de 165 sindicalistas en Colombia a lo largo de 2001, entre otros hechos, ponen de manifiesto la amplitud, en términos de los sectores y clases sociales afectados por la respuesta represiva ejecutada por los gobiernos de la región. Estas distintas formas de violencia estatal y paraestatal contra los movimientos sociales, que se expresaron en los distintos países, se complementan e inscriben en la nueva política internacional reivindicada e impulsada por el gobierno norteamericano bajo la llamada “seguridad hemisférica” que tiende a promover el fortalecimiento de un orden cada vez más autoritario y represivo como respuesta ante el creciente cuestionamiento social al neoliberalismo.

■ Libre comercio y “seguridad hemisférica”: los rostros de la hegemonía norteamericana

Los hechos del 11 de septiembre y la mi-

litarización de las relaciones internacionales promovida por los Estados Unidos y sus aliados han tenido un significativo impacto en la región. A la luz del contexto bélico internacional y de la crisis económica, la política norteamericana para América Latina parece cobrar un nuevo impulso, acelerando algunos de los procesos ya señalados por el OSALen números anteriores.

En este sentido, la nueva situación internacional es utilizada por los Estados Unidos para intentar consolidar –tanto en el plano comercial como diplomático y militar– sus intereses en la región, contando, en parte, con la anuencia expresada en las declaraciones de numerosos jefes de estado latinoamericanos con relación a la “lucha antiterrorista” del presidente Bush. La redefinición de una política de “seguridad hemisférica” que apunta ahora al combate contra el terrorismo internacional además del narcotráfico, parece estar estrechamente vinculada al “peligro” de desestabilización del actual orden regional y de los intereses norteamericanos que la creciente conflictividad social en el continente pudiera anunciar.

Esta política norteamericana en Latinoamérica reposa, en forma creciente, sobre tres ejes complementarios: el despliegue militar y la criminalización de las protestas –bajo el manto discursivo de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico–; la consolidación de la estrategia de liberación comercial tendiente a garantizar y expandir las inversiones norteamericanas y la apropiación de los recursos naturales; y, en tercer lugar, una redefinición de las instituciones continentales (OEA, TIAR) a la luz de los nuevos intereses.

En esta perspectiva, durante el conflicto en el Chapare boliviano y en el marco de la “Iniciativa Regional Andina”, el Congreso norteamericano decide incrementar significativamente la ayuda antinarcóticos para Bolivia al mismo tiempo que los líderes bolivianos Felipe Quispe y Evo Morales son acusados de terroristas por las Fuerzas Armadas bolivianas en el marco de una conferencia in-

ternacional sobre “Seguridad Nacional y Amenaza Terrorista (SNAT)”, donde afirman también que los movimientos sociales constituyen instrumentos a ser utilizados por el terrorismo. Asimismo, a finales de septiembre los más altos comandantes de las fuerzas militares de las zonas amazónicas de Ecuador y Colombia se reúnen en el marco del II Encuentro Regional Bilateral de Inteligencia para analizar “los nexos y estrategias de subversión, sus efectos políticos y militares y la injerencia del narcotráfico en las fronteras”. A mediados de octubre a su vez el Departamento de Estado de Estados Unidos, que orienta su política alrededor de una extensión del conflicto colombiano hacia la región andino-amazónica, ratifica a las FARC, ELN y AUC² como grupos terroristas, y anuncia que dentro de sus planes antiterroristas está Colombia y que utilizará su fuerza militar para combatir a estas organizaciones, en caso de que sea necesario. La creación de unidades de élite antiterroristas mexicanas, la realización de ejercicios militares conjuntos en Argentina (Ejercicio Cabañas 2001) llevados a cabo en Salta (uno de los epicentros del conflicto piquetero), y el anuncio de instalación de nuevas bases norteamericanas (Argentina, El Salvador) son también una clara manifestación de la reconfiguración de la “seguridad regional” promovida por Norteamérica y que reposa sobre el control militar del conflicto social.

En forma paralela y complementaria se intensifican las iniciativas tendientes a consolidar la liberalización comercial en la región. En este plano el hecho más importante lo constituye la aprobación por parte de la Cámara de Representantes del congreso norteamericano del *Trade Promotion Authority* (ex *fast track* o vía rápida) que habilita al presidente Bush a negociar acuerdos de integración comercial del tipo ALCA. Asimismo a finales de septiembre se realiza en Nicaragua la primera reunión de los viceministros de comercio de los 34 países americanos, excluyendo a Cuba, que componen el Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) del ALCA para seguir adelante con las discusiones sobre el establecimiento de un área de libre comercio ameri-

cana. De la misma manera, durante el período que abordamos, Honduras firma un tratado de libre comercio con República Dominicana que se suma a la serie de tratados de este estilo firmados por diversos países centroamericanos en el cuatrimestre precedente. Por último cabe señalar que el encargado de la Oficina de Negociaciones Comerciales para América Latina de Estados Unidos sostiene que su país está dispuesto a negociar un TLC con Centroamérica.

En el plano de la estrategia institucional regional de la política exterior norteamericana cabe remarcar la reunión de la Asamblea extraordinaria de la OEA en septiembre en Lima. En esta reunión se aprobó por aclamación y sin debate la Carta Democrática Interamericana que habilita a los gobiernos a pedir asistencia al Secretario General de dicha organización o al consejo permanente de la misma en caso de una alteración del orden institucional, habilitando así a la OEA a realizar las gestiones diplomáticas que considere necesarias para preservar la democracia institucional. Así pues, dicha institución avanzó sobre la idea ya presente de formación de una fuerza multilateral para luchar contra el terrorismo.

Frente a estas políticas, distintas acciones y protestas tienen lugar en Latinoamérica. En oposición al ALCA y a la liberalización comercial se realiza durante el mes de noviembre un encuentro continental de movimientos sociales y organizaciones en Cuba que rechaza los términos de la integración comercial esbozados por Estados Unidos. Por otra parte en Guatemala se celebra el Foro Globalización Xelajú 2001, en el cual 800 delegados se pronuncian contra el Plan Puebla-Panamá por considerarlo una iniciativa que afecta los derechos de los pueblos en nombre de la globalización y legitima la predación de la biodiversidad y de los recursos naturales por parte de las empresas transnacionales. También, durante el período, los movimientos sociales se movilizan frente a las cumbres y reuniones regionales o internacionales que tienen lugar en nuestra región,

por ejemplo en Lima, Perú frente a la XI Cumbre Iberoamericana. Asimismo, en muchas de las principales ciudades latinoamericanas se realizan movilizaciones –aunque en su mayoría con convocatorias menores– en rechazo a la intervención norteamericana en Afganistán y cuestionando la posición adoptada por los gobiernos de la región. Estas acciones, y las que se sucedieron a lo largo del año desde la realización del Iº Foro Social Mundial en Porto Alegre³, señalan el crecimiento, en el ámbito latinoamericano, de las acciones de convergencia y articulación regional e internacional.

■ Las protestas en Bolivia y Argentina

En Bolivia la conflictividad social en general aumentó un 48,08% durante los meses que van de septiembre a diciembre de 2001, donde hemos registrado 153 conflictos en comparación con los 104 hechos del trimestre pasado, siendo uno de los países donde se verifica el mayor incremento de las mismas.

El “conflicto cocalero” del Chapare constituye el aspecto más destacado de la conflictividad social del país en el período. La lucha contra la delimitación del cordón legal de las zonas de cultivo de coca gana en radicalidad con relación al período anterior. A partir del mes de septiembre se generalizan los cercos y bloqueos por parte de las organizaciones campesinas a los campamentos militares destinados a la erradicación de las plantaciones. Frente a las protestas el gobierno implementó un Plan Antibloqueo en el Chapare que profundizó la política represiva de las Fuerzas Armadas. A este plan represivo se le suma la puesta en marcha de un Plan de Seguridad Ciudadana Reforzado en las calles de las principales ciudades del país. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre la escalada represiva gubernamental se saldó con la muerte de numerosos campesinos del Chapare.

Ante la emergencia de una situación de ex-

tremada violencia en esas zonas y la imposibilidad de acuerdo durante las instancias varias de negociación entre el gobierno y los campesinos, muchos otros actores sociales de significación intervienen tomando posición respecto del conflicto (el gobierno de los EE.UU., algunas ONGs, grandes propietarios de tierras, etc.) así como la iglesia es convocada a oficiar de mediadora. Por otra parte, grupos no identificados realizan acciones violentas contra los campesinos, incluso masacres, acciones de amedrentamiento, atentados, etc., que han dado lugar a denuncias por parte de los organismos locales de defensa de los derechos humanos.

La lucha cocalera logra articular, en algunos momentos, acciones con otras organizaciones de trabajadores del campo (MST, Ingavi, etc.). Sin embargo no encuentra convergencias con otros movimientos activos del período como los asalariados del sector público docente –que sí logran altos niveles de convergencia con los estudiantes– o bien con los trabajadores de la salud –que realizan 2 huelgas nacionales–, ni con las distintas protestas urbanas. Se presentan como excepción en este sentido, las manifestaciones de apoyo convocadas por la Coordinadora del Agua de Cochabamba y la CSUTCB⁴, el 19 de noviembre, mientras los campesinos llaman a intensificar los bloqueos de caminos ante la ruptura del diálogo con el gobierno,.

Otro tipo de protesta que se viene desarrollando en Bolivia es la multisectorial. En este caso, el momento más importante transcurrió en lo que fue la Guerra del Agua en Cochabamba en abril del 2000⁵. En este sentido, para el presente período, vale mencionar particularmente la realización de paros convocado por comités cívicos regionales en rechazo a la privatización de la empresa tarijeña del gas (EMTAGAS), o bien en Carnavi, al norte de La Paz, cuando vecinos junto con los gremios locales realizan bloqueos de carreteras en reclamo de un pliego petitorio que contempla, entre otras cosas, la rebaja del precio de la energía eléctrica.

Finalmente intentaremos analizar breve-

mente⁶ los sucesos que, en la Argentina, llevaron a la renuncia del ex presidente De la Rúa y al final del régimen forjado a principios de la década de los '90 –cristalización particular de un ciclo de más largo aliento que hunde sus raíces a mediados de los '70 con el inicio de las políticas de corte neoliberal. Dar cuenta del complejo de fuerzas, intereses y debilidades que se dieron cita en las jornadas de diciembre nos plantea, en primer lugar, señalar por lo menos tres procesos. Por una parte el sostenido crecimiento que –frente a la continuas políticas de ajuste– venía experimentando la protesta social en los dos últimos años y que supuso también la aparición en la escena nacional de nuevos colectivos –particularmente el de los trabajadores desocupados– y de crecimiento organizativo y reivindicativo del movimiento –experiencias que ya habían merecido nuestra reflexión en los números anteriores del OSAL⁷. Por otra parte la creciente ilegitimidad política que había sabido ganarse el gobierno en su corta gestión, así como también la amplia mayoría del establishment político, y que se había reflejado palmariamente en los resultados de las elecciones de octubre de 2001 con el fabuloso derrumbe electoral de la alianza gobernante, la pérdida de votos del Partido Justicialista –aunque le permitió conquistar la primera minoría en la Cámara de Diputados y, en ese sentido, asegurarse un relativo control del Parlamento, cuestión que jugará un rol preponderante en la transición–, el vertiginoso crecimiento del voto nulo o blanco (21,1%), el caudal electoral obtenido por nuevas opciones críticas a la política gubernamental y el incremento de la izquierda. Y, finalmente, en tercer lugar, el agotamiento, en términos del bloque dominante, del círculo “virtuoso” de la convertibilidad. Agotamiento que se expresaba en la creciente disputa y tensión al interior de dicho bloque entre las fracciones financieras y de los servicios públicos privatizados –fundamentalmente transnacionales– que pugnaban por la dolarización, y la fracción acaudillada por los llamados “grandes grupos locales” –primordialmente exportadores– que defendían la devaluación⁸.

En este marco, la gestión de la “alianza”

gobernante sólo profundizó, una y otra vez, el ajuste fiscal –preservando, bajo los aleccionadores “golpes de mercado”, fundamentalmente los intereses del sector financiero y los acreedores externos– y, consecuentemente, aceleró brutalmente el largo ciclo recesivo –que lleva más de cuatro años– y los procesos de pauperización social y concentración del ingreso que signan la política económica argentina –casi sin discontinuidades– desde mediados de la década del '70. El 40% de la población bajo la línea de pobreza (casi 14 millones de habitantes), el 13,3% de indigentes (un poco más de 4,5 millones de personas), 18,3% de la población económicamente activa desocupada y casi el 40% con problemas de empleo, dan mínimamente cuenta de la situación social que había sabido consolidar el gobierno hacia el final de su mandato.

Durante las últimas semanas de diciembre estos factores y procesos, antes descritos, se combinaron e intensificaron para sellar la suerte del oficialismo. Su detonante particular fue la sanción de una serie de medidas resueltas por el Ministro Cavallo, bautizadas luego como el “corralito”, y que significaron un virtual congelamiento de los depósitos bancarios afectando tanto a los “plazos fijos” como a los retiros salariales. El impacto de estas medidas rápidamente hizo oír su voz. El miércoles 12 de diciembre múltiples protestas y cortes de ruta se realizan en todo el país, la CGT disidente y la CTA llevan adelante sendas movilizaciones, y se escuchan los primeros “cacerolazos” y “bocinazos”, y al día siguiente todas las centrales sindicales convocan a un paro nacional contra la política económica que recoge un altísimo acatamiento –uno de los mayores de la década⁹. Ese mismo día aparecen los primeros saqueos y reclamos de comida en la pcia. de Mendoza –aunque ya habían ocurrido hechos aislados en las semanas anteriores– para prolongarse, en los días siguientes, a las provincias de Santa Fe (particularmente en Rosario) y Entre Ríos, en una ola que los días 18 y 19 se multiplica en todo el conurbano bonaerense y en buena parte de las ciudades del país. En el –por cierto acotado– espacio

de la opinión pública la generalización de los saqueos opacó rápidamente la presencia de otros conflictos. Bajo estas acciones, que rememoran aquellas de 1989, los sectores más empobrecidos de las populosas barriadas de las principales ciudades del país parecían reaparecer en la arena del conflicto, redefiniendo las experiencias de cortes de ruta que habían caracterizado al movimiento de trabajadores desocupados en los meses y años anteriores. Es difícil aún evaluar con certeza este dramático proceso, sobre el que seguramente incidió la profundización de la crisis que supuso el “corralito bancario” y la proximidad de las fiestas así como aquellos –de esa extensa trama de política criolla, fuerzas de “inseguridad” y delito que envuelve particularmente a la provincia de Buenos Aires– que intentaron sacar provecho del “río revuelto”. Puede sí señalarse que, en donde existían procesos de organización colectiva anteriores, las acciones se caracterizaron por la movilización en reclamo de comida ante las cadenas de supermercados, la presión y la negociación.

Por la noche del 19 de diciembre el ex presidente De la Rúa anunciaba por cadena nacional el dictado del Estado de Sitio, medida aparentemente consensuada con los gobernadores justicialistas. Sobre el final de su discurso y en un acto de abierta desobediencia civil los vecinos de Buenos Aires –y de numerosas ciudades del país– comenzaban a hacer sonar sus cacerolas, para reunirse luego en las esquinas e iniciar una larga marcha hacia los lugares símbolos del poder político: la residencia presidencial de Olivos, la casa del Ministro Cavallo, el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo. Cuando las primeras columnas de vecinos, donde se destacaban las mujeres, los jóvenes y los niños, llegaban a la Plaza de Mayo repiqueteando las cacerolas, ya era pasada la medianoche. Singularmente, la represión que se descargó sobre los primeros manifestantes que se concentraban en la plaza, no hizo desistir al conjunto. Durante buena parte de la noche, en una jornada que se reinicia el jueves desde la mañana, se prolonga una verdadera batalla callejera por la

ocupación que se extiende paulatinamente a todo el centro de la ciudad. Las imágenes de estos enfrentamientos, la distintiva presencia juvenil, el encarnizamiento policial hacen recordar a las jornadas de Génova de julio de 2001 contra la Cumbre del G8. La brutal represión –que ya fue referida en otra sección de este artículo– cobra cientos de heridos y detenidos y, por lo menos, 7 muertos bajo las balas policiales. Hacia el fin del día, el Ministro Cavallo, y luego el Gobierno en su conjunto, renuncian. La tan inesperada como intensa protesta y movilización ciudadana –de aquellos que fueron principales apoyos electorales del triunfo de la Alianza en 1999–, y la respuesta represiva que los acogió marcan así, si se quiere como una reedición inversa del “17 de octubre”, el fin del gobierno de De la Rúa. Señalan también la profundidad de la crisis de hegemonía que atraviesa hoy al modelo neoliberal en Argentina.

En otro sentido, la “revuelta de las cacerolas” muestra la aparición de sectores urbanos –particularmente las clases medias con toda la amplitud que dicho término guarda hoy tras décadas de empobrecimiento y concentración del ingreso– en el ciclo de la protesta que describimos para los primeros meses del cuatrimestre en el apartado referido a los trabajadores del sector público. Así también la irrupción de sectores juveniles, en un espectro que va más allá del clásico movimiento estudiantil.

Tras la asunción de Rodríguez Saá de su brevísimo mandato como presidente, las disputas de poder al interior del Partido Justicialista (a la que no fue ajena el conjunto del establishment político) y la puja entre las fracciones del bloque dominante abrieron el espacio para que el bullar de las cacerolas y las movilizaciones marcaran el tiempo de la crisis política. La elección, por la Asamblea Legislativa, de Duhalde como nuevo presidente, está lejos aún de haber resuelto la profunda crisis de hegemonía expresada con particular intensidad desde finales de diciembre. A diferencia de los sucesos de 1989, cuando la hiperinflación y los saqueos apresuraron la

asunción de Carlos Menem a la presidencia dando inicio a una profundización radical de las políticas neoliberales (luego sancionadas en la “convertibilidad”), hoy la constitución, sobre las cenizas de aquel régimen, de un nuevo modelo, enfrenta tanto la dificultad de reconstruir la unidad de los poderes económicos –ahora con la aparente preeminencia de los “grupos locales”– así como la creciente resistencia social a la prolongación, una vez más, del patrón regresivo de distribución del ingreso. En este contexto, resultan por demás preocupantes los renovados intentos de consolidar una política represiva ante las demandas sociales.

En lo que cabe al movimiento social las experiencias de los “cacerolazos”, los piquetes barriales y las movilizaciones han abierto, al interior de los sectores urbanos, nuevos procesos de organización local cuya potencialidad y riqueza todavía no pueden ser evaluadas en toda su dimensión. Por otra parte, ya sobre las primeras semanas de enero, a la par de los nuevos “cacerolazos” que ya acompañan la gestión de Duhalde, otras protestas vuelven a manifestarse, particularmente protagonizadas por los trabajadores del sector público y del movimiento de trabajadores desocupados que ya habían encarnado el ciclo de movilizaciones durante septiembre y octubre de 2001.

En tanto los hechos no concluyen, quizás valdría interrogarse sobre en qué medida, si la otrora “Argentina convertible” forjada por Menem y Cavallo fue presentada por los organismos internacionales de crédito como el exitoso camino a seguir, la de hoy no podría ser pensada como el espejo del futuro posible del neoliberalismo.

■ Bibliografía

AA.VV. 2000 Dossier “Bolivia. La ‘Guerra del Agua’ en Cochabamba”, en *OSAL* (Buenos Aires) N° 2, Septiembre.

Dinerstein 2001 “El poder de lo irrealizado. El *corte de ruta* en Argentina y el potencial subversivo de la mundialización”, en *OSAL* (Buenos Aires) N° 5, Septiembre.

Galvão, Boito, Coletti y Trópia 2002 “Lutas sociais no Brasil em 2001”, en *OSAL* (Buenos Aires) N° 6, Enero.

Iñigo Carrera y Cotarelo 2001 “La protesta en Argentina (enero-abril de 2001)”, en *OSAL* (Buenos Aires) N° 4, Junio.

López Maya 2002 “Venezuela: entre protestas y contraprotestas el gobierno de Chávez se endurece y debilita”, en *OSAL* (Buenos Aires) N° 6, Enero.

Lozano 2001 “Contexto económico y político de la protesta social en la Argentina contemporánea”, en *OSAL* (Buenos Aires) N° 5, Septiembre.

Rodríguez 2001 “Un ‘Rosario’ de conflictos. La conflictividad social en clave local”, en *OSAL* (Buenos Aires) N° 5, Septiembre.

Scribano y Schuster 2001 “Protesta social en la Argentina de 2001: entre la normalidad y la ruptura”, en *OSAL* (Buenos Aires) N° 5, Septiembre.

Seoane y Taddei 2001 “Protesta social, ajuste y democracia: la encrucijada latinoamericana”, en *OSAL* (Buenos Aires) N° 4, Junio.

Seoane, Taddei y Algranati 2001 “Neoliberalismo, crisis y resistencias sociales en América Latina: las configuraciones de la protesta”, en *OSAL* (Buenos Aires) N° 5, Septiembre.

Seoane, Viú, Rodríguez y Santucho 2001 *Informe de Coyuntura* Área de Investigación, Unión de Trabajadores de Prensa

de Buenos Aires, mimeo.

Spaltenberg y Maceira 2001 “Una aproximación al movimiento de desocupados en el marco de las transformaciones de la clase obrera en Argentina”, en *OSAL* (Buenos Aires) N° 5, Septiembre.

Spaltenberg, Seoane, Rodríguez y Santucho 2000 *Informe de Coyuntura octubre-diciembre* Area de Investigación, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, mimeo.

■ Notas

1 Agradecemos especialmente la colaboración de Ivana Brighenti y de todo el equipo del OSAL.

2 FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; ELN: Ejército de Liberación Nacional; AUC: Autodefensas Unidas de Colombia.

3 Ver “Cronología de la protesta internacional de 2001” en el presente número del OSAL.

4 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

5 Ver AA.VV. Dossier “Bolivia. La ‘Guerra del Agua’ en Cochabamba” en la

revista del OSAL N° 2.

6 Las limitaciones de espacio nos exigen, en este caso, presentar una revisión sumaria de los hechos. Un análisis de mayor profundidad puede consultarse en “Protesta social y fin de régimen en Argentina, ¿espejo futuro del neoliberalismo?”, José Seoane, mimeo, OSAL/CLACSO.

7 Ver Seoane, Taddei y Algranati, 2001; Seoane y Taddei, 2001; Iñigo Carrera y Cotarelo, 2001; Dinerstein, 2001; Scribano y Schuster, 2001; Spaltenberg y Maceira, 2001; Rodríguez, 2001; Seoane, Viú, Rodríguez y Santucho, 2001; Spaltenberg, Seoane, Rodríguez y Santucho, 2000.

8 Ver Lozano, 2001; Seoane, Viú, Rodríguez y Santucho, 2001; Spaltenberg, Seoane, Rodríguez y Santucho, 2000.

9 Vale señalar también que entre el viernes 14 y el lunes 17 el Frente Nacional contra la Pobreza –multisectorial que agrupa a la CTA, organismos de derechos humanos y asociaciones de pequeños propietarios del campo y la ciudad– realizó una consulta nacional por el reclamo de un seguro de empleo y formación para los jefes y jefas de hogar desocupados que recogió casi de 2,9 millones